REGISTRO N° 13-S FOLIO N° 52/5

EXPEDIENTE N° 166796 JUZGADO N° 2

En la ciudad de Mar del Plata, a los 11 días del mes de febrero de 2020, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "**BANCO GALICIA C/ GALERA JUAN CARLOS Y OTRA S/ EJECUCION HIPOTECARIA**", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

1ra.) ¿Es justa la sentencia de fs. 125/126?

2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:

I. En la sentencia dictada a fs 125/126 con fecha 11 de febrero de 2004, el Sr. Juez rechazó la excepción opuesta por los ejecutados a fs. 114/19 con costas, por entender que no se trataba de ningunas de las defensas admitidas por la ley.

Explicó que los argumentos de los accionados se refieren a aspectos que hacen al cumplimiento de la relación sustancial entre las partes, que resultan ajenos al proceso ejecutivo.

Los ejecutados habían invocado al caso fundamentos para justificar la falta de pago de las cuotas del mutuo hipotecario reclamadas aduciendo que no era voluntario sino que obedecía a la emergencia económica y la crisis ocasionada por la salida de la convertibilidad de la moneda nacional y la pesificación e indexación asimétrica (años 2002/2003), y que el banco acreedor había sido suspendido en sus operaciones por el BCRA, habiéndose hablado incluso de su cierre. Entendieron que esta situación puso en riesgo la eficacia de la percepción de las cuotas.

II. Apelaron lo ejecutados a fs.129. Los fundamentos fueron presentados en el escrito de fecha 3 de marzo de 2004 (fs.135/137), que quedaron incontestados.

Pidieron la revocación de la sentencia, sosteniendo que:

1. Su confirmación causaría el virtual quebranto de su parte, dejando a su familia en situación de desamparo, sentando un serio antecedente por el despojo de la vivienda única en condiciones que no se han respetado y que fueron modificadas por decisiones ajenas a los contratantes.
2. Provocaría la pérdida de la vivienda, con la indudable crisis económica y psicológica y afectiva para el entorno familiar.

3. Su parte quiere pagar en las condiciones pactadas y no en un solo pago como ahora se le reclama.

4. Debe tenerse en cuenta la delicada situación de la familia, en particular de su hija que requiere un tratamiento especial -en razón de la enfermedad denunciada a fs.117 vta.- y fundamentalmente el amparo de la justicia.

5. La sentencia hace caso omiso a lo expuesto, apegándose con todo rigor a un código ritual que en las circunstancias especiales dadas en nuestro país no debe ni puede ser aplicado a rajatabla, debiendo considerar la situación política, económico y socio ambiental especiales de cada caso, y fundamentalmente tener en cuenta las circunstancias fácticas de una crisis social generalizada como la padecida en 2001.

6. Se ven sometidos a un proceso judicial sin que se les haya permitido efectuar pagos una vez que pudieron recuperarse económicamente.

III. El recurso no merece prosperar, de acuerdo a los argumentos que seguidamente expondré.

Pero ante todo, debo aclarar que no serán atendidos la totalidad de los agravios planteados, sino sólo aquellos que resulten esenciales y decisivos para dictar el veredicto (CSJN Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250;243:563 entre otros), por cuanto los jueces deben resolver las cuestiones traídas a su conocimiento bajo el prisma del principio “iura curia novit”, esto es, encuadrando de un modo autónomo la realidad que se evidencia en el proceso subsumiéndola en las normas que la rigen con prescindencia de los fundamentos enunciados por las partes (CSJN “Hernández, Elba del Carmen c/Empresa El Rápido”, 8/3/1994; “Medilewski, Jacobo Rubén c/ Szarfman, Isaac” del 4/8/1987; Fallos 310:1535 entre otros)

1.La discusión que pretendió introducir la ejecutada es propia de un proceso de conocimiento. En el proceso ejecutivo, por regla, las defensas están limitadas a las establecidas por la ley (art 595 del CPC) y la discusión de la causa en principio queda reservada para el proceso ordinario posterior (art. 551 del CPCC).

El juicio ejecutivo en nuestro derecho es, en definitiva, un proceso de conocimiento simplificado y asimilado en buena medida a la ejecución de la sentencia, por la existencia y formación previa de un título que hace verosímil el derecho del accionante. (Fassi “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado”, tºII, p.453 con citas de Morello, Palacio, Alsina y Berrondo) Se trata en suma de un proceso declarativo abreviado en cuanto al debate (SCBA Ac y Sent 1958 T II,p400), que no persigue la declaración judicial de existencia de un derecho, sino la satisfacción de un crédito. Se asienta, además, en la indiferencia de la causa de la obligación y en que, como consecuencia, la defensa se ve limitada a agregar instrumentos que acrediten la extinción de la deuda reclamada. (Donato, “Juicio Ejecutivo”, 4ta edición actualizada, Ed. Universidad, p.66 y sgtes)

Lo expuesto no impide, igualmente, adoptar criterios más flexibles cuando se trata de una relación de consumo dada la índole de los derechos en juego (art 42 Constitución Nacional). En este sentido, la jurisprudencia y doctrina con el correr de los años ha ido adoptando

posturas más proclives en este sentido pese a estrecho marco que proporciona en juicio ejecutivo, tal como ocurre en los casos en los que es preciso verificar el cumplimiento del deber información calificado que exige el art. 36 de la ley 24.240.

Pero en el caso de autos, por más de que sea de aplicación el estatuto del consumidor, no fue planteada una defensa que si quiera justifique una discusión sobre la causa. Los ejecutados no cuestionaron la eficacia del contrato, ni denunciaron la abusividad de sus cláusulas o algún incumplimiento del banco acreedor de los deberes previstos en el Ley 24.240. La deuda, contraída en dólares, al ser reclamada por el Banco fue pesificada de acuerdo al sistema normativo impuesto a partir el dec. 214/2002.

Los accionados se presentaron invocando la equidad frente a un contexto de crisis y justificando su incumplimiento en que el banco acreedor había sido suspendido por el BCRA, por lo que dudaban de la validez de los pagos que pudieran efectuar, sin mencionar si quiera (ni mucho menos acreditar) haber intentado un juicio de consignación ante tal incertidumbre. Fundaron su defensa en el caso fortuito, olvidando que la mora hace responsable al deudor también en ese caso y sin ensayar más que una excusa infundada (arg art.886, 995, 1733 inc. c del CCyC)

Por lo demás, tampoco he encontrado algún motivo que de forma manifiesta se presente para considerar - de oficio- que está conculcado algún derecho de los ejecutados en su carácter de consumidores o que se justifique una morigeración de los intereses teniendo en cuenta los parámetros del art. 771 del CCyC y la jurisprudencia anterior a su entrada en vigencia adoptada en el mismo sentido. La deuda ejecutada ha sido liquidada de conformidad a las normas de pesificación.

2. Por lo demás, no pasa inadvertido que la totalidad del planteo ha perdido actualidad pues gira en torno al desequilibrio generalizado que se produjo como consecuencia de la salida de la convertibilidad en el año 2001 y las consecuencias que provocaría el despojo de la vivienda en ese contexto.

Los ejecutados intentaban - según sus palabras- "reencausar" la deuda con certeza para poder cancelarla (ver fs.115 vta). No solo nunca la desconocieron sino que en reiteradas oportunidades manifestaron su voluntad de pago. Pero han pasado más de 18 años desde la fecha de la mora denunciada (fs. 97 vta) y no han arribado a un acuerdo. No surge del expediente que esa voluntad se haya materializado.

Cuestionaron la eficacia y justicia de la decisión en el año 2004 que llega a este Tribunal para ser revisada cuando han pasado 16 años, luego de que la causa estuviera paralizada. Es decir que en los hechos, la pretensión de los ejecutados ha sido satisfecha. Efectuaron un pedido de espera y, a través del trámite de este proceso y del evidente desinterés del banco, lo obtuvieron.

Así, los agravios acerca de la caducidad de los plazos por la mora y el eventual despojo que la sentencia provocaría por no acceder a un plan de pagos, carece de vigencia. El contrato de mutuo ejecutado fue celebrado el 12/10/2000 por la suma de u\$s32.000.-, que los deudores se comprometieron a devolver en 240 cuotas mensuales y consecutivas (es decir en 20 años contados a partir del 12/11/2000). De haber abonado en tiempo y forma, a la fecha del dictado de esta sentencia, restarían solo 9 cuotas por pagar, es decir que ya habría devuelto casi la totalidad del dinero que se le reclama.

3. De conformidad con lo expuesto, considero que el recurso debe rechazarse, confirmándose la sentencia apelada (arts.163, 242 inc 1, 260, 266, 542, 595 y cdtes del CPC)

Así lo voto.

El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:

En atención al modo en que fue votada la cuestión precedente, corresponde rechazar el recurso interpuesto por la ejecutada a fs. 129, confirmando la sentencia de fs. 125/126. Las costas deben imponerse en el orden causado, dada la ausencia de controversia (art 68 del CPC)

Así lo voto.

El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

En consecuencia se dicta la siguiente

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso interpuesto a fs. 129, confirmando la sentencia dictada a fs. 125/126; II) Imponer las costas en el orden causado, dada la ausencia de controversia (art 68 del CPC); III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967). **REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE** (art. 135 del C.P.C.). **DEVUÉLVASE.**

RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU

Alexis A. Ferrairone

Secretario